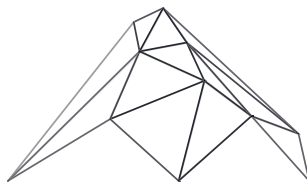


DOSSIER

Mariel Aguilar-Støen
Benedicte Bull
Andrés McKinley
Nick Middeldorp
Mario Sánchez González
Josué Arévalo Villalobos



PROTESTAS CONTRA LA MINERÍA EN GUATEMALA ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS ÉLITES EN LOS CONFLICTOS?

*Mariel Aguilar-Støen
Benedicte Bull*

Recibido: 13/05/2016 Aceptado: 01/07/2016

Resumen

Las protestas de los movimientos contra la industria extractiva, particularmente en Guatemala, han sido enfrentadas en la mayoría de los casos con respuestas violentas de parte del Gobierno y de las compañías mineras. El análisis pone particular atención a la forma en la que las élites operan y construyen alianzas, y manejan los recursos y medios para imponerse, generalmente con violencia. El análisis presentado en este artículo sugiere que la respuesta violenta del Gobierno es el resultado de lo que la élite percibe como nuevas amenazas, en un contexto en el cual la vieja élite económica no ha logrado establecer una dominación hegemónica. La respuesta violenta está respaldada por una estrategia que resulta de una alianza discursiva y material en la que están implicados los militares, la élite económica –la vieja y la emergente– y el Gobierno. Se exponen y analizan también las demandas del movimiento de resistencia a la minería para entender de mejor forma el poder al cual se enfrentan los movimientos de resistencia.

Palabras clave: conflictos socioambientales; política ambiental; elites; resistencia.

Abstract

Opposition to extractive industries in Guatemala has in general been met with a violent response from the government and the private companies. Our analysis pays particular attention to the ways in which the élite operates and builds alliances, and the resources and means used by the élite to impose, generally with violence, order. The analysis presented here suggests that the violent response from the government is the result of what the élite perceives as threats to its hegemony –though that hegemony is incomplete. The violent response to social protests is backed by a strategy that results from the material and discursive alliance that links the military, the economic élite –old and emerging– and the government. We also analyze the demands from social movements against mining to better understand the power these movements must confront.

Keywords: socio-environmental conflicts; environmental politics; elites; resistance.

Introducción

Con este ensayo se pretende analizar algunos aspectos que permiten entender la represión a la protesta pacífica contra la minería y otras industrias extractivas en Guatemala. Al respecto, Mc Allister y Nelson (2013) proponen el término “tiempos del posgenocidio”, con lo cual se pretende enfatizar que los eventos violentos ocurridos durante la guerra civil todavía no han sido superados en este país. Ante esto, para entender esa respuesta violenta del Gobierno y de las empresas se requiere un análisis que combine el estudio de la resistencia con el análisis del papel que las élites –un complejo y dinámico conglomerado de actores e intereses– juegan al influir en la respuesta del Gobierno. Así, se pretende llenar el vacío en los estudios que se han enfocado en la resistencia a la minería en Guatemala, en particular, y, de manera más general, en la ecología política como marco de referencia para estudiar los conflictos socioambientales.

Hasta el 2015, el significado económico de la minería en Guatemala ha sido limitado, pues nunca ha excedido el uno por ciento del producto interno bruto (BAN-GUAT, 2015). La oposición pacífica a la minería, a otros proyectos agroextractivos (i.e. palma africana) y a las hidroeléctricas es parte de una serie de iniciativas que comenzó a emerger en Guatemala poco tiempo después de la firma de la paz que puso fin a la guerra civil en ese país en 1996. Este hecho significó una transformación de las formas en que la violencia se manifestaba en el país, mas no la resolución de las causas que dieron origen a la guerra (Mc Allister y Nelson, 2013).

La minería se insertó dentro del modelo económico guiado por la lógica del mercado capitalista global. Así, Guatemala inició una reforma del Estado durante la segunda mitad de los años ochenta, la cual implicó la adopción de políticas de liberalización económica y el retorno a la democracia en 1986. Esto significó la consolidación de un modelo de Estado en el que se ha construido un marco legislativo y regulatorio que privilegia a la empresa privada en sectores económicos particulares (Harvey, 2005). En el caso de Guatemala, la revitalización del sector primario (agroindustria, petróleo y minería). En este modelo, el sector privado tanto doméstico como transnacional colabora íntimamente con el Estado y adquiere un papel fundamental en la formulación de leyes y la selección de prioridades en cuanto a políticas públicas y marcos regulatorios, que favorecen principalmente los intereses del sector privado (más detalles sobre el proceso de formulación de leyes en el sector minero se encuentran en Dougherty, 2011). Aunque a nivel global, las inversiones extranjeras directas en este sector son reducidas y la minería representa solo una pequeña porción de las inversiones, en ciertas regiones del mundo este sector es el único o el más importante que atrae inversión extranjera, al no poder hacerlo otros como el manufacturero o el de servicios (Bridge, 2004). En el caso de Guatemala, por ejemplo, en el año 2013 la minería recibió el 45 por ciento del total de inversión directa extranjera (Aguilar-Støen, 2016).

Los inversores más importantes son compañías canadienses, estadounidenses y rusas, así como el sector privado nacional (Aguilar-Støen, 2015).

El proceso que condujo a la firma de la paz en 1996, también significó la apertura de ciertos espacios políticos a actores subalternos y el desarrollo de instrumentos legales que perseguían fortalecer la participación popular en las decisiones sobre el desarrollo; lo cual se enmarca dentro de la lógica neoliberal que trastoca las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en un contexto que favorece los contactos transnacionales de la sociedad civil. Las reformas neoliberales que persiguen promover la liberalización económica, la privatización de bienes del Estado y la descentralización, también partían de la premisa de generar más participación de la sociedad civil. Con este fin, varias organizaciones indígenas con apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) lograron ejercer presión para el reconocimiento de derechos colectivos particulares a los pueblos indígenas. Así, las reformas de multiculturalismo surgen de una dinámica compleja que involucra actores internacionales y transnacionales, así como locales y nacionales.

Los movimientos sociales opuestos a las industrias extractivas en Guatemala han sufrido una creciente represión. Según la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEHUGUA) entre el año 2000 y el 2014 se observó un incremento en las agresiones a los defensores de derechos humanos en Guatemala de 59 a 813 casos, respectivamente. Los defensores que han sufrido más agresiones durante el mismo periodo son los que se enfocan en asuntos ambientales, campesinos y de derechos de los pueblos indígenas. Además, 174 activistas de derechos humanos fueron asesinados en el mismo periodo.¹ Adicionalmente, la instalación de megaproyectos ha generado conflictos internos en las comunidades entre quienes apoyan a las empresas y quienes defienden los derechos humanos.

Ante esto, la represión experimentada por estos movimientos puede interpretarse como la reacción de una élite que nunca logró dominar a través de un Estado “hegemónico”, en el sentido gramsciano. De este modo, y bajo una nueva presión por la apertura económica y el surgimiento de nuevos actores –transnacionales y nacionales– han surgido nuevas brechas entre diferentes grupos económicos que han agudizado la competencia por dominación.

Gramsci (1971) distingue entre situaciones donde la élite había establecido una hegemonía en la que, a pesar de la dominación cultural y económica de la burguesía sobre los subalternos, estos pasaron a ser sujetos y no “objetos”, y las situaciones en las cuales la élite no lo ha logrado. En el último, caso la dominación de la élite sería dictatorial y cruda. Sin embargo, aun en bloques hegemónicos se tiende a distinguir estrictamente entre subalternos que pueden ser ubicados dentro del bloque, y los que se consideran adversarios. En el caso de Guatemala, se puede entender el periodo de posguerra como una época en la cual ha ocurrido un doble proceso: por un lado, competencia entre la vieja élite y los nuevos grupos que emergieron debido

a cambios estructurales, tanto políticos como económicos; acompañada de intentos por establecer una hegemonía ideológica que incluye a los subalternos. Por otro lado, una estrategia de fuerte represión hacia quienes se les considera adversarios.

Los estudios previos del movimiento antiminerero en Guatemala se han enfocado en las prácticas políticas de los participantes en las protestas o en el contenido de sus demandas. Por ejemplo, Sieder (2010) ha analizado las protestas antimineras como un ejemplo de la juridificación de la política, la cual implica un enfoque en la litigación y en la adopción de un lenguaje legalista como respuesta a la debilidad institucional del país. Del mismo modo, Holden y Jacobson (2009) se interesan también en las prácticas, al darle particular énfasis a la importancia de las redes de activistas y al rol clave que juegan los actores nacionales y transnacionales en la movilización de recursos y la formación de discursos. Al usar el concepto de ciudadanía, Rasch (2012) sugiere que los actores involucrados en la resistencia contra la minería combinan diferentes formas y contenidos en el concepto de ciudadanía para formular la demanda de autonomía territorial. Mientras que otros se han concentrado en el papel de las comunidades locales (Yagenova y García, 2009); algunos argumentan que la lucha contra la minería persigue legitimar a la comunidad como la escala en la cual se deben tomar decisiones (Urkidi, 2011; Pedersen, 2014). En línea con este enfoque, Fulmer *et al.* (2008) argumentan que la voluntad política del Estado es necesaria para garantizar la democracia en los procesos de toma de decisión sobre asuntos mineros. El análisis del movimiento antiminerero en Guatemala, por lo general, se ha ocupado del Occidente y del conflicto con la mina Marlin, descrito como una lucha maya (Cuffe, 2005; Hurtado y Lungo, 2007; Fulmer, Godoy *et al.*, 2008; Holden y Jacobson, 2009; Yagenova y García, 2009; Nolin y Stephens, 2010; Sieder, 2011; Urkidi, 2011; Rasch, 2012). Sin embargo, a partir del 2009 se desarrollaron nuevos conflictos en otros sitios, por ejemplo el bloqueo conocido como “Resistencia La Puya” en San José del Golfo, a 25 kilómetros de la ciudad de Guatemala (Pedersen, 2014), y la protesta contra la mina “El Escobal” en el suroriente del país (Aguilar-Støen, 2015).

Aunque estos análisis proveen información y perspectivas valiosas sobre los movimientos antiminereros, en el presente artículo se busca combinar un análisis de este con un análisis del complejo set de élites que promueve la minería en Guatemala. El argumento de esta investigación plantea que los ataques contra las diversas formas de resistencia ponen en evidencia aspectos clave de una alianza entre la élite económica tradicional, la élite militar de la guerra y el gobierno de Guatemala. Esta alianza ha sido decisiva para determinar cómo estos actores reaccionan ante las demandas populares en el contexto de postguerra. Entender esta alianza requiere no solo un estudio del conflicto, sino también del desarrollo de las élites que dominan el sector minero desde hace varios años. El objetivo de este artículo es analizar y explorar los vínculos y las interacciones entre diferentes élites en el país y el gobierno *vis a vis* los movimientos sociales, para contribuir a explicar la respuesta violenta por parte del Gobierno a los movimientos antiminereros.

Élites, resistencia y ecología política

La ecología política ha sido utilizada para analizar las luchas alrededor del acceso y control de los recursos naturales que frecuentemente implican luchas de grupos subalternos contra el poder de las élites y sus implicaciones para los pobres. La ecología política tiende a privilegiar su enfoque de análisis hacia los derechos y preocupaciones de los pobres sobre aquellos de los actores políticos más poderosos y de las élites económicas (Bryant y Jarosz, 2004; Watts y Peet, 2004; Escobar, 2008; Robbins, 2011). Consecuentemente, la literatura de la ecología política ofrece pocos matices para entender a las élites (Bull y Aguilar-Støen, 2015); por ejemplo, en la literatura de ecología política generalmente estas aparecen como un grupo de perpetradores más o menos homogéneo, pues son los dueños del capital, quienes controlan los negocios, el conocimiento, al Estado, contribuyendo así a la marginalización de las personas que habitan los espacios rurales y la sobreexplotación de los recursos naturales (Carruthers, 2008; Robbins, 2011). La literatura sobre conflictos mineros en Guatemala no es la excepción (Dougherty, 2011).

Los enfoques neomarxistas de la ecología política en los años ochenta explican los conflictos ambientales en términos de relaciones de clase y la extracción de excedentes vinculados con la producción capitalista global negaban el rol que la política local jugaba en el acceso a los recursos y en los conflictos y, consecuentemente, en muchos de los análisis el papel de diferentes actores (Estados, corporaciones, campesinos) con frecuencia era simplista (Bryant, 1998). El Estado era típicamente considerado como un agente más del capital, oscureciendo tanto la autonomía del Estado en relación con el capital y la diversidad de intereses que frecuentemente constituyen el Estado (Bryant, 1998) y las élites.

Con este ensayo se pretende contribuir a iluminar los roles que la élite doméstica y los gobiernos juegan como socios, intermediarios o beneficiarios de la explotación minera. El análisis pone particular atención a la forma en la que las élites operan y construyen alianzas, así como a los recursos y medios que utilizan para imponer, generalmente con violencia, el orden. Se puede entender a élites como “Grupos de individuos que dado su control sobre recursos naturales, económicos, políticos, sociales, organizativos o simbólicos (incluido el conocimiento) se colocan en una posición privilegiada para influir de manera formal o informal decisiones y prácticas que tienen implicaciones sociales y ambientales clave” (Bull 2015; traducción propia). En este ensayo se analizan los vínculos y las dinámicas entre las diferentes élites en Guatemala incluyendo los grupos de negocios domésticos y transnacionales, los propietarios de los medios de comunicación, las élites intelectuales, la élite política y los militares y el Gobierno.

Por su parte, la desigualdad en sus múltiples expresiones es una característica fundamental en la politización del ambiente. Como señala Bryant (1998), algunos grupos se ven afectados de manera más adversa que otros por los procesos de transformación

del ambiente. Entre estos sobresalen los pueblos indígenas, para quienes, desde la colonia, los procesos ha significado empobrecimiento, destrucción de sus medios de vida, desplazamiento, despojo y degradación del ambiente local. Un cuerpo considerable de literatura dentro de la ecología política ha documentado y analizado las formas en que los pueblos indígenas son despojados (Bryant, 1998). Sin embargo, en Guatemala los conflictos mineros, en particular, y extractivos, en general, involucran distintos grupos subalternos, incluidos indígenas y mestizos.

Los estudios enmarcados en la ecología política parten de la noción de que las condiciones sociales y ambientales están constituidas por relaciones asimétricas de poder. Dicha asimetría se expresa en el control del ambiente por un actor sobre otro –en Guatemala incluye, por ejemplo, desvío de fuentes de agua o desplazamiento de ciertos grupos del territorio (Aguilar-Støen, 2016)–. Pero, en otro nivel la resistencia también se expresa en transformaciones del ambiente impuesto (en Guatemala por ejemplo la remoción de diques que desvían ríos en la costa sur). El poder también se expresa en las percepciones, discursos y reclamos contradictorios acerca de la noción de desarrollo y de los procesos ecológicos. Existe una larga tradición en la ecología política que considera el poder de las ideas para reforzar o disputar los arreglos económicos, sociales y políticos existentes (Bryant, 1998). En este artículo se pretende demostrar como también las ideas, los discursos y los reclamos sobre la ciencia y el conocimiento son usados por grupos subalternos. Estos grupos generalmente rebaten las justificaciones que las élites políticas y económicas utilizan para justificar el uso de los recursos naturales a través de tácticas de resistencia (discutidas por ejemplo por Scott, 1990). Los conflictos ambientales son tanto luchas sobre los significados como luchas sobre las prácticas materiales. La contribución que se pretende con este artículo es ofrecer un análisis detallado de los argumentos utilizados por las élites para justificar la minería y las formas y los canales por los que se difunden y se consensuan dichos argumentos, así como los recursos materiales que circula entre las élites y que cementan sus alianzas. Los procesos de producción de conocimiento reflejan y a la vez refuerzan, las desigualdades sociales y económicas, en tanto ciertas afirmaciones basadas en conocimiento científico pueden ser utilizadas como base para la elaboración de políticas públicas (Bryant and Bailey, 1997; Fairhead y Leach, 1994). Este análisis se enfoca, en particular, en los estudios de impacto ambiental, un campo en el que la disputa entre las élites, el Gobierno y la resistencia se ha manifestado de manera particular.

Metodología

El análisis se basa en el trabajo de campo realizado en Guatemala del 2010 al 2014 por Mariel Aguilar-Støen. Este incluyó entrevistas con hombres y mujeres en el campamento de la resistencia de Santa Rosa en abril del 2013, así como las observaciones

durante tres diferentes consultas de buena fe, tres reuniones de información a la población y numerosas manifestaciones contra la minería en la ciudad de Guatemala. El trabajo de campo incluyó entrevistas a seis de las siete personas que fueron heridas durante el ataque armado realizado por la seguridad privada de la mina. También se entrevistó a representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a representantes de organizaciones no gubernamentales ambientalistas y de derechos humanos que apoyan la resistencia, representantes de la Iglesia católica (acusada de estar detrás de la resistencia), un oficial de la oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Guatemala y una persona de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, así como oficiales de la embajada de Noruega y de una ONG noruega, ambas con sede en Guatemala. Estas entrevistas fueron incluidas debido a que la estrategia corporativa contra la resistencia minera incluye difamación en contra de la cooperación internacional para el desarrollo, en particular con los países nórdicos.

Por su parte, Benedicte Bull recopiló datos sobre los patrones de inversión y los grupos de negocios en Guatemala. Mucho de este trabajo fue realizado en conexión con el proyecto de investigación “Confronting Transnationalization: the Economic, political and environmental strategies of Central American Business Groups” (Bull *et al.*, 2014). La recopilación de datos consistió además en la inspección sistemática de revistas de negocios y periódicos, estadísticas públicas cuando estaban disponibles y entrevistas con líderes de negocios, consultores de negocios y directivos de organizaciones del sector privado. Aunque existe incertidumbre sobre la posibilidad de verificar la información en muchas de estas fuentes, la disponible es escasa y existen muy pocos medios para accederla y, por lo tanto, fue necesario sistematizar recuentos orales y fuentes secundarias. Finalmente, los periódicos y medios digitales de información constituyeron valiosas fuentes de material empírico para este análisis.

Violencia y represión

Las respuestas a los numerosos conflictos con mineras y otras industrias extractivas han sido similares, lo cual es indicativo de un patrón enmarcado dentro de una estrategia. Algunas de estas respuestas son acciones legales contra individuos (p.e. denuncias al sistema de justicia, órdenes de arresto, arrestos, entre otras) contra las iniciativas de las comunidades (p.e. litigios contra las consultas locales) y la declaración de estado de sitio y el establecimiento de puestos militares (el primero ha sido declarado por diferentes gobiernos en distintos sitios donde ocurren conflictos con las industrias extractivas). También han ocurrido asesinatos, atentados violentos y arrestos contra activistas ambientales. En el caso de la mina “El Escobal” cinco personas han sido asesinadas, entre ellas una menor de edad, quien era líder de la organización de jóvenes en resistencia a la minería.

En el caso de la mina El Tambor, una activista del movimiento La Puya sufrió un atentado con arma de fuego y una persona fue asesinada. En el caso del conflicto que involucra a las comunidades de San Juan Sacatepequez, tanto activistas ambientales como quienes apoyan a la empresa han sido asesinados, incluida una masacre que resultó en la muerte de seis personas. En Santa Rosa, se realizaron arrestos masivos (32 personas) durante protestas pacíficas contra la minera “El Escobal” y seis hombres fueron heridos por el personal de la empresa privada de seguridad de la mina. Estos ejemplos de la reacción violenta contra la protesta se combinan con vigilancia, amenazas y la militarización de las áreas donde existen conflictos. Las áreas donde se encuentran proyectos extractivos también registran conflictos intracomunitarios entre quienes están a favor de la empresa, quienes suelen recibir beneficios directos e indirectos de las empresas y los activistas ambientales y de derechos humanos, estos conflictos llegan incluso a dividir familias y frecuentemente también se registran actos de violencia en los cuales los involucrados son miembros de la comunidad.

El Gobierno, las compañías mineras y las organizaciones empresariales están implicados en diferentes procesos legales, relacionados con los arrestos de activistas ambientales o de Derechos Humanos, o con casos en la Corte Constitucional, en particular aquellos que desafían la legalidad de las consultas. Aunque el Congreso de la República reconoce que actualmente existen solo ocho presos políticos en Guatemala, el número podría ser más elevado, y en su mayoría son activistas ambientales, indígenas y de derechos humanos.

En el caso de los arrestos, los acusadores son personas de la comunidad vinculadas con la mina (p.e. empleados, familiares de estos o proveedores de servicios), quienes carecen de recursos para completar los procesos legales. Los acusadores, usualmente, son apoyados por abogados que tienen vínculos con la mina. En otros casos, el acusador es la propia compañía minera, e incluso el gobierno guatemalteco. La criminalización de la protesta pretende, por una parte, debilitar el movimiento de resistencia y, por la otra, desalentar a las personas para que no se involucren en las protestas. Como una consecuencia colateral, estas acciones crean o refuerzan divisiones internas entre quienes apoyan la mina y aquellos que se oponen a esta.

Otras acciones han sido extra judiciales e incluyen diferentes formas de acoso de la policía, la seguridad privada de las minas y los grupos armados no identificados, este accionar comprende amenazas de muerte, vigilancia, actos de intimidación, asesinatos e intentos de asesinato. Ante esto, resulta importante mencionar que además de la seguridad privada de las minas la policía nacional se encuentra dentro de la infraestructura de las estas o es enviada a proteger la maquinaria de las empresas mineras (p.e. El Escobal y El Tambor)

Para ejemplificar, Golán es una empresa de seguridad privada israelita fundada en 1983 por oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel. En Guatemala,

Golán se estableció en noviembre de 1987, por este motivo durante la guerra civil en este país centroamericano, el ejército estuvo respaldado por el ejército y la inteligencia israelí (Solano, 2015). Actualmente, Golán es una empresa que ofrece seguridad privada en varios países de América Latina e Israel (Solano, 2015), y ha vendido sus servicios de seguridad a varios proyectos mineros como “El Escobal”, “Marlin” y “Fénix”, en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes de seguridad privada. Golán también ha estado envuelta en la vigilancia de las poblaciones locales y ha preparado reportes para la policía, con el fin de arrestar a civiles.

Relaciones ventajosas: la élite minera doméstica y la minería transnacional

¿Por qué se incrementa la represión en el contexto de la posguerra? La respuesta a esta pregunta es compleja, y se encuentra en parte en los cambios en la economía global que ha resultado en nuevas alianzas entre actores domésticos e internacionales, y el surgimiento de nuevas élites emergentes que podrían competir por el poder.

¿Quiénes conforman la élite económica en Guatemala?

Marta Elena Casaús (1992), en su obra *Guatemala: linaje y racismo*, traza la historia de la élite económica del país al señalar la importancia de las relaciones de parentesco entre la configuración del poder económico y político de este grupo desde la colonia. Las élites económicas guatemaltecas continúan organizándose en grupos de negocios multisectoriales y de propiedad familiar, pero actualmente sus principales inversiones se encuentran en la agricultura, la manufactura, las finanzas y la construcción o los bienes raíces. Comparados con grupos empresariales en otras partes de América Central, los guatemaltecos se han expandido significativamente a los países vecinos. Además, como la mayoría de los grupos empresariales centroamericanos, los guatemaltecos se diversifican de acuerdo con una “lógica de cartera”, es decir, entran a nuevos sectores en tanto las oportunidades de negocios emergen, en lugar de enfocarse solo en aquellos donde existen sinergias lógicas.

Los sectores que demandan grandes cantidades de capital y tecnología, generalmente, son destinados a las empresas transnacionales. Aunque hay algunas excepciones significativas, incluyendo la compañía minera no metálica “Cementos Progreso”, propiedad de la familia Novella. Este patrón se torna claro en el sector de minería de metales, donde todos, excepto uno de los proyectos mineros mayores, son propiedad de compañías transnacionales o sus subsidiarias (tabla 1). Actualmente, existen ocho de estos activos en Guatemala. Solo la mina de oro en “El Sastre” es de propiedad local, dado que la compañía canadiense Argonaut Gold vendió sus acciones a la familia Lemus Abal en el 2010.²

Sin embargo, antes de abordar el aspecto anterior, es necesario ilustrar cómo otros actores que no pertenecen a la élite tradicional están vinculados a la minería. Por ejemplo, el ex ministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien, como se explicó, es dueño de importantes medios de comunicación, tiene intereses en las mineras a través de su hermano Herbert Alejandro Archila, vicepresidente de manejo de portafolio y planeación de la transnacional minera BHP Billiton. Esta empresa fue hasta hace poco la mayor accionista de la minera Mayaniquel, con licencias en el área del proyecto minero Fénix (Solano, 2012).

Socios minoritarios

Los grupos económicos domésticos participan como socios minoritarios en proyectos específicos; por ejemplo, miembros de las familias de la élite adquieren posiciones como gerentes de compañías o como sus abogados, o frecuentemente resultado de lo anterior, adquieren acciones en un proyecto junto con las compañías transnacionales. De esta manera, las élites domésticas se benefician de los conocimientos y la destreza de las empresas transnacionales, es decir, del “saber cómo”, mientras que las segundas se favorecen de las redes de contactos que controlan las élites domésticas, el “saber con quién”. Al respecto, Luis Solano señala que

Es casi una costumbre ver entre los socios o funcionarios de las compañías a personalidades de las élites de poder, tanto como a funcionarios de la administración pública que han contribuido al establecimiento de las transnacionales. El éxito de las operaciones de estas transnacionales depende en última instancia de los lazos que logren entablar con los grupos de poder locales, sean estos económicos y/o políticos (2005: 105).

Esta tendencia se relaciona con la de los viejos grupos económicos de moverse para controlar las redes de carteras de inversionistas. De esta manera, establecen compañías de inversión generales o especializadas y se convierten en socios minoritarios de las subsidiarias locales de transnacionales (Bull *et al.*, 2014).

En muchos casos, la élite doméstica ha abierto las puertas para las inversiones de las compañías transnacionales. Por ejemplo, la mina Marlin en San Marcos fue establecida con el apoyo del matrimonio Berger-Novella (que emparenta a estas dos familias de la élite) y servidores públicos vinculados a estas dos familias. El proceso de adquisición de tierra para la mina fue llevado a cabo a finales de los años noventa por la compañía Peridot S.A., representada por Erick Álvarez Mancilla, antiguo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Durante la fase de preparación del proyecto, Milton Saravia, un amigo cercano de María Eugenia (Nini) Novella, esposa de Françoise Berger, quien es primo del antiguo presidente Oscar Berger, era el secretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas; mientras que Mario Marroquín, actual director ejecutivo de Montana y Entre Mares, fue el representante de la Asociación para la

Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS), establecida por Cementos Progreso, la principal compañía de la familia Novella.

Hay varias compañías mineras registradas por miembros clave de estas familias de la élite económica, pero no existe información verificable sobre sus inversiones en dichas minas. Entre estas compañías se encuentran Silver Crown Investments, propiedad de Nini Novella de Berger, Francoise Berger y sus dos hijos; Gold Point International, de los hijos del antiguo presidente Oscar Berger, Juan Esteban, Ignacio y Oscar Berger Widman. Además, la familia Novella también está vinculada a la familia Maegli, tanto a través de relaciones de parentesco como por la propiedad compartida de varias empresas. Una de estas es Camino Gold, S.A., de Juan Maegli Müller, Juan Estuardo Maegli Novella y otros miembros de la familia.

En el caso de la mina El Sastre existe un patrón similar, pues su representante legal, Jorge Luis Ávalos Asturias, también es dueño de la compañía Químicos y Minerales, S.A. y era socio de Aurogin Resources, que operaba la mina hasta que fue vendida a Castle Gold y luego a Argonaut.³ Ávalos Asturias y su socio José Manuel Lemus Abal eran socios minoritarios de El Sastre a través de la compañía Rocas El Tambor, S.A. hasta que adquirió la mayoría de las acciones en el 2013. Lemus Abal también es el presidente de Rocas Bridge, S.A. y de Exploraciones Mineras de Centroamérica, S.A.; ambas con licencias en el proyecto minero El Sastre. Por su parte, las familias Maegli y Widman también eran propietarias de la tierra en donde se estableció la mina de níquel Fénix en El Estor. Estas dos familias están vinculadas con la familia Berger tanto a través de matrimonios como de inversiones conjuntas. La firma de abogados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) A.D. Sosa & Soto, es propiedad de Rodolfo Sosa de León, antiguo socio comercial del ex presidente de la República, Óscar Berger, cuyo hijo se casó con la hija de Sosa de León (Godoy, 2006).

Proveedores de servicios

Las compañías domésticas también funcionan como proveedoras de bienes y servicios, incluyendo electricidad, infraestructura y equipo. Por ejemplo, Juan Maegli Müller es dueño del grupo Tecun, especialista en la provisión de equipo para el sector minero, y uno de los principales proveedores de infraestructura para el Gobierno de Guatemala (ICEFI, 2015). Por su parte, la familia Springmühl, otra de la élite de origen alemán, posee acciones del grupo Tecun. Además, varias familias de la élite están involucradas en la provisión de energía; entre estas se puede mencionar al grupo Gutiérrez Bosch Multi Inversiones (Basic Resources) y al grupo Campollo/Campollo Codina/Weissenberg Campollo (Palencia-Prado, 2012).

Además de ser propietario de la Compañía Petrolera del Atlántico y de tener fuertes intereses en el sector de la energía eléctrica, el grupo Campollo Codina está vinculado con la minería de otras formas. La fortuna del grupo Campollo Codina se

origina en el sector azucarero y el mismo Erick Álvarez Mancilla es el ex gerente general y representante legal del mayor ingenio de este grupo, la Central Agro-Industrial Guatemalteca, S.A.-Ingenio Madre Tierra- (CAIGSA).

Otro tipo de servicio que involucra a las élites emergentes es la elaboración de estudios de impacto social y ambiental (EISA), pues son clave no solo para la autorización de licencias mineras, sino también como una estrategia para enfrentar las demandas de participación del sector local (Aguilar-Støen y Hirsch, 2015). Marcia Roxana García Sobenes, ex ministra de Ambiente y Recursos Naturales (2012-2014), era, antes de asumir el ministerio, consultora ambiental en la empresa Grupo SIGA (una de las principales consultoras ambientales del país). También fue fundadora y vicepresidenta de la "Fundación para la Selva" y del Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. García Sobenes está casada con el militar Sergio Gabriel Monzón Ordoñez, ex gerente general y representante legal de la Compañía Guatemalteca de Níquel, dueña del proyecto minero Fénix (Solano, 2012). Uno de los EIA que sobresalen es el que se elaboró para la minera Tikal Minerals, S.A., el cual estuvo coordinado por Jorge Eduardo Romero Gramajo y su empresa. Al mismo tiempo, Romero Gramajo fue el primer gerente de la minera Montana Explotadora a cargo de la mina Marlin.

Enlaces políticos

A través de la historia, las élites políticas y económicas han estado estrechamente unidas. La segunda ha controlado al Gobierno tanto directa, tal como es el caso durante los gobiernos de Álvaro Arzú (1996-2000) y el de Óscar Berger (2004-2008), como indirectamente. Por ejemplo, el informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señala que el sector azucarero contribuyó sustancialmente a financiar la campaña presidencial de Berger, del empresario de medicinas Gustavo Alejos a la de Álvaro Colom (2008-2015) y de las cuatro familias más ricas del país, incluida la Novella y la de Otto Pérez Molina (2012-2015) (CICIG, 2015). Entre los objetivos que se persiguen con el financiamiento de los partidos están la protección de sus intereses, el facilitar negocios existentes o el abrir puertas a nuevos negocios (CICIG, 2015); así, la coherencia ideológica entre los financistas y los partidos parece ocupar un segundo plano.

Este control del Gobierno depende, en parte, de la estructura de financiación del Estado. Guatemala es el país de América Latina con el nivel más bajo de recaudación de impuestos, el cual ha variado entre el 7,8 y el 12 por ciento entre 1995 y el 2012 (ICEFI, 2015); pues ha sido imposible hacer reformas significativas al sistema de recaudación tributaria debido a la oposición de la élite económica (Valdez y Palencia Prado, 1998; Schneider, 2012; ICEFI, 2015). Sin embargo, durante los últimos años, el Gobierno también ha financiado gran parte del presupuesto nacional mediante la deuda pública, que actualmente constituye el 23 por ciento del producto interno bruto. Cerca del 50

por ciento de esta deuda ha sido adquirida principalmente por los bancos nacionales controlados en gran medida por la misma élite (Kasahara, 2012).

Esta estructura impulsa un Estado financieramente débil que puede ser “capturado” con facilidad por intereses particulares, lo cual lo vuelve vulnerable a la corrupción. Pese a esto, se ha sugerido que en el tráfico de influencias en el congreso y los ministerios no es solo el dinero lo más importante, sino también las redes de contactos personales que pueden ser utilizadas para adquirir favores. Las redes de actores privados son utilizadas para asegurar la posición de políticos en posiciones clave del aparato estatal, que favorezcan los intereses de estas redes (Bull, 2014). A modo de ilustración, Eduardo Aguirre Cantero, actual gerente de Relaciones Institucionales de Cementos Progreso (de la familia Novella) y miembro de la directiva de la Cámara de Industrias Extractivas, fue gerente de la oficina del presidente y vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Berger.⁴ En ese mismo gobierno, Federico Moreno fungió como viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (ICEFI, 201). Además, es importante dominar el sistema judicial, en tanto la interposición de numerosas apelaciones ante la Corte Constitucional (CC), de acuerdo con la Ley de Amparo que permite a cualquier persona apelar ante la CC, ha sido un método común para evitar las decisiones desfavorables.⁵ El difunto Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte, vinculado a Cementos Progreso, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en el 2009⁶ y el ex gerente general de esta compañía, Jorge Alfredo Lemcke Arévalo, se desempeñó como embajador de Guatemala en los Países Bajos entre el 2012 y el 2014.⁷ Él también era el propietario de la tierra donde se construyó la mina El Tambor.

En un sistema dominado por redes, en lugar de reglas transparentes respaldadas por instituciones robustas, el hecho de mantener contacto personal con gente influyente es necesario para asegurar un mínimo de predictibilidad para las condiciones de inversión. Aunque un grupo de familias influyentes continúa disfrutando de altos niveles de influencia, está siendo desafiado por nuevas élites económicas, que emergen del control de nuevas actividades económicas, tanto legales como ilegales. Así como estas últimas también cuentan con amplias conexiones políticas, las viejas élites se involucran en renegociaciones constantes con los políticos sobre decisiones que presentan implicaciones importante para sus negocios (ejemplos de las redes emergentes de las actividades ilegales son analizados por Dardón y Calderón, 2014). Por su parte, el informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sugiere que el financiamiento de la política en Guatemala se distribuye de la siguiente manera: 25 por ciento del sector privado tradicional, 50 por ciento de corrupción y 25 por ciento de crimen organizado (CICIG, 2015).

La extrema debilidad institucional también requiere de relaciones con actores armados; razón por la cual las compañías de seguridad privadas han proliferado en Guatemala durante los últimos 20 años, y la mayoría de ellas cuenta con personal

militar retirado en sus cuadros. Incluso, las fuerzas militares oficiales también están a la disposición de ser contratadas (Argueta, 2010).

Por lo tanto, aunque la minería sea de importancia económica menor en Guatemala, el controlar los ingresos generados por las actividades asociadas a la minería puede ser de gran importancia para la élite local, no solo para obtener ganancias, sino también, para mantener su influencia en las redes de poder en competencia.

Otro aspecto necesario para entender el incremento en la represión y la violencia al movimiento antiminero se encuentra en la apertura de nuevos espacios políticos para la participación de la sociedad civil, los cuales fueron abiertos por nuevas leyes aprobadas después del fin de la guerra civil y por las alianzas que las organizaciones de la sociedad civil han establecido con redes transnacionales de resistencia.

“La resistencia”: el movimiento de protesta contra la minería

Las demandas del movimiento se dan por representación, participación y memoria histórica, así como por el reconocimiento y respeto de formas colectivas de tenencia de la tierra (Aguilar-Støen, 2015). Uno de los argumentos en el discurso de la resistencia plantea que los efectos de la minería se evidencian en lugares específicos; por ejemplo, por la contaminación del agua o la competencia por el mismo recurso entre los intereses mineros y la agricultura. De esta forma, el movimiento demanda implementar la descentralización, iniciada aunque sin completar, después de la firma de los acuerdos de paz, por medio de la cual las municipalidades y las comunidades locales jugarían un papel importante en la toma de decisiones locales, incluidas las ambientales.

En cuanto a la organización, la resistencia ha utilizado distintas tácticas tanto en su forma de organización, como en las acciones que emprenden. Ante esto, una variedad de organizaciones indígenas y campesinas se ha unido al movimiento contra las industrias extractivas en el país; además, las mujeres han sido particularmente visibles en las protestas antimineras.

Los movimientos de resistencia contra la minería se originan, en parte, en el proceso que condujo a la firma de los acuerdos de paz en los años noventa. En esa década emergieron nuevas formas de organización y las antiguas fueron revitalizadas, al incluir organizaciones con identidad indígena, campesina o femenina. Durante la guerra civil existió una sólida dinámica organizativa, apoyada por el ala radical de la Iglesia católica y, hasta cierto grado, por el movimiento cooperativista (Pearce, 1998). Muchas de las comunidades mejor organizadas fueron el blanco de la represión y eventualmente desarraigadas por la guerra. Al mismo tiempo, los campos de refugiados en México se convirtieron en el escenario donde nuevas dinámicas organizativas surgieron con el apoyo de algunas ONG internacionales.

A través de estas acciones, las mujeres y la población indígena pudieron superar sus roles marginalizados y han ganado experiencia en la negociación y el desarrollo de proyectos (Støen, 2007). Además, con las negociaciones de los Acuerdos de Paz, estos grupos encontraron nuevos, aunque limitados, espacios políticos en donde sus voces podían ser escuchadas. El resultado más significativo de la participación de los pueblos indígenas en el proceso de paz es el “Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas” firmado en 1995, el cual reconoce a Guatemala como un país multiétnico, culturalmente plural y multilingüe (Pearce, 1998).

De igual forma, se debe destacar la firma y ratificación del Convenio de la OIT 169 sobre los pueblos indígenas, realizada por Guatemala en 1996. Muchas de las organizaciones que eventualmente surgieron o se hicieron más visibles con las protestas mineras son aquellas que tuvieron sus orígenes en los años setenta (p.e. Comité de Unidad Campesina), mientras que las autoridades indígenas fueron revitalizadas durante el proceso de paz (p.e. el Parlamento del Pueblo Xinka o el Consejo de los Pueblos de Occidente). Esto demuestra que aunque con varias identidades, y con la lucha contra los proyectos extractivos como una nueva identidad que las aglutina, la existencia de estas organizaciones tiene una larga historia.

Dado que las ONG poseen conocimientos y habilidades de los cuales carecen muchos gobiernos, desde los años ochenta el papel de estas y de la sociedad civil se pensó como crucial para el desarrollo en todo el mundo. Por ejemplo, instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, empezaron a presionar a los gobiernos para que incluyeran a las ONG como socias del desarrollo, y este es el caso de Guatemala (Bräutigam y Segarra, 2007). Una década después, cuando los Acuerdos de Paz estaban negociándose, muchas ONG de origen europeo empezaron a preocuparse por las relaciones de género, los pueblos indígenas y las problemáticas ambientales. Esto se reflejó luego en el financiamiento y la elección de proyectos a ser financiados; lo cual dio origen a la existencia de ONG ambientalistas, de mujeres y de derechos humanos que han prestado apoyo a los movimientos de resistencia contra las industrias extractivas. Sin embargo, debe quedar claro que las relaciones entre las ONG y las comunidades locales no están exentas de paradojas, contradicciones y luchas de poder.

Los escenarios de la resistencia

Los escenarios de la resistencia se clasifican en el espacio jurídico-legal que incluye las consultas comunitarias; el espacio de la disputa del conocimiento científico, de acuerdo con las luchas por el contenido de las Evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y el escenario de la acción colectiva directa.

En cuanto al espacio jurídico-legal, para el 2014 se habían organizado 114 consultas comunitarias de buena fe, la mayoría en el altiplano occidental, en donde la base organizativa tiene una larga historia. La mayoría de las consultas ha sido sobre

proyectos de minería, seguidas por proyectos hidroeléctricos; las cuales tienen su base legal en el Código Municipal y la Ley de Consejos Comunitarios de Desarrollo. El resultado de las consultas ha sido abrumadoramente un rechazo a la minería y a las compañías hidroeléctricas. Sin excepción, los resultados de las consultas fueron impugnados por el sector empresarial en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Hasta el 2013, la CC amparó al sector empresarial, sin embargo, en ese mismo año, avaló por primera vez los resultados de una consulta comunitaria sobre minería (Municipio de Mataquescuintla, Jalapa). La actuación de la corporación municipal y el alcalde al organizar la consulta evidencia discrepancias entre los distintos niveles del Estado, con lo cual se demuestra que este no es una entidad monolítica, ni representa a los intereses en todas las escalas geográficas. Ante esto, la CC basó su argumento en el Convenio 169 de la OIT, el cual, a su vez, se ampara en el derecho de los pueblos a ser consultados, y afirma que la vinculación de la consulta se debe dar a nivel municipal. Es decir, que la municipalidad podría otorgar o no licencia de construcción a una mina, aunque el Ministerio de Energía y Minas haya otorgado una licencia de explotación.

Por su parte, otro escenario se refiere a las disputas sobre el conocimiento científico, particularmente en lo relativo a las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). En más de un 90 por ciento de los casos, las EIA son aprobadas por el Gobierno sin modificaciones (Aguilar-Støen y Hirsch, 2015). Ante esto, han surgido disputas gracias a la participación de expertos internacionales independientes que revisan las EIA aprobadas por el Gobierno. Además, las comunidades locales generalmente se ponen a estas, pues se encuentran en una posición extremadamente desventajosa comparada con las compañías extractivas, debido a la existencia de una serie de barreras que les impide manifestarse sobre el contenido o el procedimiento de las EIA. Estas limitantes incluyen distancia geográfica, el lenguaje y los requerimientos técnicos que impone la ley para expresarse acerca de las EIA. Al mismo tiempo, estas barreras han sido parcialmente superadas gracias al involucramiento de expertos internacionales y de las alianzas entre las comunidades, las organizaciones locales y las ONG.

Las ONG forman parte de redes transnacionales a través de las cuales fluyen recursos e información, y por medio de estas las organizaciones locales tienen acceso a conocimiento científico de expertos, lo cual persigue legitimar sus demandas contra el Gobierno y las empresas. Los expertos en estos casos (ingenieros, geólogos, hidrólogos, etc.) son considerados como tales tanto por la forma y la amplitud de sus conocimientos, como por el lugar de residencia (generalmente países industrializados) (Kothari, 2005). El solicitar la ayuda de estos grupos para desafiar el poder de las empresas y la legitimidad de las EIA les permite a los movimientos sociales participar en sistemas de *expertise* y en estructuras de autoridad comúnmente reservadas para la industria y el Gobierno, pero deslegitimando los procesos y productos generados por consultores y empresas. Aunque las comunidades y los movimientos sociales tienen información

sobre las deficiencias en las prácticas de las EIA y sobre las consecuencias ambientales de los proyectos, no es sino hasta que estos son traducidos al lenguaje específico de los expertos que las demandas de las comunidades cobran legitimidad. La ayuda de este grupo y el conocimiento científico por movimientos de resistencia no son exclusivos de Guatemala, sino que también se encuentran en el centro de las batallas transnacionales para enfrentar la expansión de las industrias extractivas.

Al formar parte de redes transnacionales, en las cuales las ONG y los activistas internacionales son clave, las comunidades y los movimientos de resistencia ganan acceso a recursos y conocimientos que fluyen en esas redes y a nuevas arenas. El poder al cual acceden los movimientos de resistencia es una combinación de marcos legales que reconocen sus derechos, así como el conferido por los recursos que circulan en dichas redes. Como es evidente en el discurso de los movimientos de resistencia, estos se organizan alrededor de asuntos específicos (la comunidad, el territorio), tales como los impactos ambientales y las consecuencias económicas y sociales de las industrias extractivas en el ámbito local, pero lo conectan con redes transnacionales y los recursos que pueden movilizarse desde ahí. Esto les permite a los movimientos locales mejorar sus posibilidades de politizar asuntos aparentemente técnicos, como las EIA.

El tercer escenario son las movilizaciones, manifestaciones, plantones y otras formas de acción colectiva directa. Con estas tácticas, los movimientos antimineros han ganado visibilidad nacional e internacionalmente, y cierto nivel de apoyo y simpatía a nivel de país. En este sentido, se han observado tanto actos de acción colectiva directa, por ejemplo con la marcha por el agua en el 2016. Otros autores, así como los medios de comunicación alternativos han ahondado en los detalles de las diversas marchas, manifestaciones, plantones, etc.

La combinación de iniciativas en estos tres escenarios ha resultado en respuestas del sistema de justicia que apoya las demandas de las comunidades y organizaciones en resistencia. Por ejemplo, para junio del 2016, la CC dictaminó seis procesos en el oriente. En uno de ellos la resolución de la corte fue desfavorable (siete licencias de exploración, mina El Escobal) y cinco resoluciones favorables (tres de ellas relacionadas con la mina El Escobal, uno a Niquegua Montufar en Izabal y otro a la mina El Tambor). En este caso en particular, en 2015 la CC amparó a una ONG (CALAS) en su petición de suspensión de actividades mineras por falta de consulta a la población local, la cual está organizada en el movimiento denominado "Resistencia La Puya", que agrupa indígenas y mestizos de las municipalidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Más tarde, en febrero del 2016, la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente las operaciones de explotación de la mina "El Tambor", y en junio del mismo año, el Ministerio Público inició acciones legales contra la compañía minera por incumplimiento de la suspensión de la licencia.⁸ En las resoluciones relacionadas con El Escobal, la pronunciada por la CC se fundamenta en deficiencias sobre el proceso

relacionado con la EIA y por deficiencias relativas a la consulta de pueblos indígenas (Muñoz, 2016). En 2016, la CC resolvió también a favor de los amparos presentados por el Consejo de Pueblos de Occidente sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y dictó seis sentencias a favor de los pueblos que anularían seis licencias mineras en el occidente de Guatemala (Marlin) por falta de consulta.

Otra pieza en la explicación de la reacción a las protestas se vincula con el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, pues ambas han puesto al descubierto recientemente la corrupción del sistema político y los estrechos vínculos entre el sector empresarial y el Estado (culminando en el 2015 con la renuncia del presidente y la vicepresidente, y en 2016 con una serie de arrestos por corrupción contra empresarios, exministros, militares, entre otros). Ante esta situación, el Ministerio Público ha sido transformado, fortaleciendo, aunque no en su totalidad, al sistema de justicia del país. La CICIG y el fortalecimiento del Sistema de Justicia son resultado del énfasis puesto después de la firma de los Acuerdos de la Paz en “transparencia y rendición de cuentas” y del trabajo de organizaciones de la sociedad civil luego de la firma de la paz. Aunque un análisis detallado de este tema no cabe en este ensayo, resulta necesario mencionar que todos estos cambios son percibidos como amenazas para la élite económica.

¿La resurrección del enemigo interno?

La narrativa promovida por la alianza entre élites empresariales, los militares de la guerra y el Gobierno se centra en el desarrollo y el progreso empujados por el sector privado y el libre mercado. Así, la narrativa propuesta por las élites y el gobierno busca dar sentido al mundo, al explicar causas y efectos, relacionar estas con la experiencia individual y colectiva a través del tiempo y el espacio y reproducirla, en tanto “enseña” a los sujetos a interpretar y entender el mundo (Block y Sommers, 2014). Sin embargo, no son solo las ideas de libre mercado las que caracterizan su ideología; por ejemplo, Bull (2014) identifica las tres principales líneas ideológicas que en diferentes momentos de la historia reciente le han dado cohesión a la élite en Centroamérica, o que han sido usadas para forjar alianzas con los militares. En el caso de Guatemala, la ideología anticomunista es prominente (Ibarra, 2006; Bull, 2014).

La narrativa en contra de la protesta social contemporánea se construye fuertemente desde el anticomunismo, aunque por momentos también presenta elementos de la ideología neoliberal. Durante la guerra fría, el comunismo era una categoría de alteridad contra la cual se luchaba en Guatemala, y los demás eran retratados de manera similar a la forma en que ahora se hace con los participantes en el movimiento antiminero: hipócritas, manipuladores de las ignorantes masas indígenas, con agendas escondidas para su propio avance económico.

Al respecto, Ibarra argumenta que la década entre 1944 y 1954 se “creó espacio para estos sujetos colectivos [indígenas, líderes sindicales, estudiantes] de una manera que era impermissible para la oligarquía, la jerarquía eclesiástica y la extrema derecha política” (2006: 195) y de ahí se crea la figura del enemigo interno para justificar el terror, la violencia y el genocidio contra la población indígena durante la guerra civil. De acuerdo con el reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) identificó al enemigo interno como aquel a ser derrotado (CEH, 1999). La DSN fue el principio militar que guió al ejército de Guatemala durante la guerra fría (Schirmer, 1998); además, promovía la idea del enemigo interno como la principal amenaza a la estabilidad nacional, una noción intrínseca a la represión durante la guerra civil en Guatemala. El concepto de enemigo interno podía aplicarse, entonces, a los miembros del partido comunista, a los políticos de oposición, a los curas, a los sindicalistas urbanos, a los intelectuales o a los activistas rurales (Oglesby y Ross, 2009).

Los actores involucrados en la alianza

La estrategia definida por la élite está condicionada, en parte, por el establecimiento de una alianza discursiva que crea y promueve una narrativa particular, la cual es diseminada por el Gobierno, las compañías mineras, otras empresas extractivas y los militares. Al llamarla estrategia se quiere enfatizar el cálculo y manipulación de relaciones de poder para asegurar la posición de los actores poderosos (de Certau, 1984). Una estrategia define también las formas legítimas de acción y establece los límites aceptables de las prácticas (Aguilar-Støen, 2015), pero requiere sitios de poder o lo que de Certau (1984) llama *propers*. Las universidades, ministerios, medios de comunicación, cámaras empresariales y otros pueden ser considerados centros de poder.

Entre los actores implicados en la creación de esta alianza se puede incluir a los académicos de derecha, quienes tienen vínculos con la Universidad Francisco Marroquín (UFM), periodistas y otras figuras públicas relacionadas con el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la UFM o ambas, así como los medios de comunicación convencionales y algunas organizaciones no gubernamentales con claros vínculos con el ejército, por ejemplo la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). La primera está encabezada por un exmilitar, Ricardo Méndez-Ruiz, hijo de Ricardo Méndez-Ruiz, ministro de gobernación durante el gobierno de Ríos Montt, y tiene vínculos claros con la AVEMILGUA, la cual actualmente está organizada en veintidós sedes municipales o departamentales y que pretende organizar no solo a militares retirados, sino también a todos aquellos que colaboraron con el ejército durante la guerra, incluidos los excomisionados militares. Las relaciones entre la élite económica y la militar se caracterizan por ser alianzas durante la guerra

y posteriores a la firma de la paz. El juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos-Montt en el 2013 marcó el inicio de una nueva etapa de alianzas entre la élite militar y el ejército (Pellecer, 2013).

La UFM fue establecida por el empresario y miembro de la junta directiva de la Cámara de Industria, Manuel Ayau Cerdón. Su trabajo inició con la fundación del Centro para Estudios Económicos y Sociales-CEES en 1958. Ambas entidades menosprecian al Estado y comparten una preocupación básica por la libertad del individuo, y una convicción de que a largo plazo las ideas gobernarán. El CEES estableció pronto contactos internacionales y empezó a discutir ideas desarrolladas en los Estados Unidos y Europa; con empresas como la Fundación para la Educación Económica (Foundation for Economic Education-FEE) en Nueva York, la Sociedad Mont Pellerin en Austria y a través de estas organizaciones con personalidades como Milton Friedman y Friedrich von Hayek.

En 1972, Ayau fundó la UFM con el propósito explícito de divulgar la teoría liberal política y económica. A través del CEES, la UFM y de varias asociaciones aliadas se promovió la narrativa de la historia de Guatemala: “Durante los últimos 50 años, Guatemala ha estado estancada en un modelo de gobierno del estado de bienestar el cual lentamente ha obtenido múltiples funciones y atributos que previamente eran satisfechas voluntariamente por los miembros de la sociedad” (CEES, 2000: s. p.). Este Estado, de acuerdo con la historia presentada ahí, ha sido financiado a través de la imposición tributaria a la élite, frenando el empleo y el desarrollo de la nación (Bull, 2005: 61-2).

A través de los años se formó una amplia gama de instituciones encargadas de promover las ideas del libre mercado y del rol del sector privado en el desarrollo. El CACIF se creó en 1957, explícitamente como una “entidad de choque” o un grupo de presión contra el Gobierno (McCleary, 1999), abrigaba diversas visiones, entre ellas el evangelio de la UFM. La agencia estadounidense para el desarrollo internacional USAID promovió un set de instituciones que representaban las ideas empresariales y del libre mercado en Centroamérica. En Guatemala el *think-tank* de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) es un ejemplo de ese set (Valdez, 2015). CACIF, FUNDESA y otras fundaciones empresariales constituyen, lo que se llama, una “estructura de consentimiento” en Guatemala.

Dicha estructura descansa también en el control empresarial de los medios de comunicación. Aunque la falta de transparencia respecto a la propiedad de las frecuencias de radio hace difícil saber con certeza quién es dueño de qué, claramente de las 13 frecuencias de televisión en Guatemala, ocho le pertenecen al magnate mexicano Ángel González, quien a través de su compañía, con base en Miami, Televideo Services Inc., controla 83 frecuencias de radio. El resto, así como los periódicos de mayor circulación en el país, incluyendo *Prensa Libre* y *Siglo XXI*, están en manos de grupos de empresarios locales. Por ejemplo, el canal de televisión Canal Antigua es propiedad

del ex ministro de Energía y Minas, Erick Archila (Centro Civitas, 2014), quien era formalmente el presidente de la compañía. Archila también es dueño de Emisoras Unidas, una radio de cobertura nacional, de un diario de circulación gratuita *Publi News* y de la revista semanal *Contrapoder* (CICIG, 2015). La CICIG enfatiza que el control de los medios no se limita a la propiedad concentrada de los mismos, pues los medios de comunicación contribuyen a posicionar líderes políticos y a excluir a otros de la cobertura noticiosa; esta diferencia depende en parte del financiamiento de los medios (CICIG, 2015).

Los medios de la alianza

Para este análisis se revisaron documentos, los cuales⁹ pretenden identificar a los actores involucrados en las protestas contra la minería y en otras industrias extractivas, así como analizar sus motivaciones. Estos han sido preparados por gente vinculada con la Universidad Francisco Marroquín, y los más burdos por la FCT. Además, la información presentada en estos documentos es la misma que ha sido usada por el personal de la UFM en su docencia y en análisis y debates públicos de los conflictos sociales.

En estos documentos, la descripción de los movimientos sociales refleja de maneras importantes la idea del enemigo interno de los años ochenta. Todo aquel que se opone a las industrias extractivas es considerado como un “promotor del conflicto social”. Las causas y las motivaciones son explicadas en términos de una conspiración contra el Estado y la economía, en una suerte de continuación de la guerra civil. De acuerdo con la narrativa, en esta conspiración, la Iglesia católica, las agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, las ONG guatemaltecas y las organizaciones de base se unen para continuar peleando una guerra que perdieron.

La narrativa, además, sugiere que mucha de la gente involucrada en organizaciones opuestas a las industrias extractivas son exguerrilleros o grupos de izquierda simpatizantes de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. Por su parte, el ambientalismo es la ideología que reemplaza al comunismo. Entre la evidencia para apoyar estos argumentos se puede mencionar los documentos producidos por la misma UFM o sus allegados. Al mismo tiempo, la narrativa sugiere que el involucramiento de las organizaciones que están en contra de las industrias extractivas es motivado por intereses económicos, en tanto su participación en dichas actividades les abre las puertas al dinero de la cooperación internacional. La embajada noruega, la agencia sueca para la cooperación internacional para el desarrollo y la embajada de los Países Bajos fueron identificadas como los financistas de los conflictos sociales.

Los documentos también esbozan una estrategia para enfrentar la protesta social, la cual consiste en poner énfasis en asesorar a los medios de comunicación y a los servidores públicos. Finalmente, la estrategia recomienda al sector corporativo que,

como las consultas locales ya no pueden ser ignoradas, el sector se debe involucrar en cambios a la legislación para regular las consultas comunitarias de tal forma que se eliminen todas las formas de participación que no son congruentes con la “participación democrática” (esto es eliminar todas las prácticas en la consulta que no son congruentes con el sistema de partidos políticos). En conjunto la estrategia asume que las personas que viven en los lugares del área rural son ignorantes y fáciles de manipular, que el Estado de Guatemala es débil e innecesario para alcanzar una mayor aceptación de los proyectos extractivos en el país (Castillo-Girón, 2010).

Los vínculos

Además del nivel discursivo, los vínculos entre las élites económica-militar y el Gobierno en estas iniciativas y acciones se evidencia con el apoyo económico que las compañías brindan a la policía y al ejército en sus operaciones (ONU, 2013),¹⁰ especialmente por el hecho de que empleados de las compañías mineras en posiciones clave de la seguridad privada, o los directores de oficinas públicas son exmilitares y por el grado de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las oficinas públicas y las compañías privadas de seguridad que prestan servicio a las compañías mineras.

Al mismo tiempo, los medios comerciales de comunicación, incluida la televisión y la radio, contribuyen a difundir la narrativa. Entre los involucrados se encuentra por ejemplo, Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM, y presidente de la cámara de periodismo de Guatemala; escribe regularmente en periódicos guatemaltecos. Además, Trujillo es un exmilitar español que llegó a Guatemala luego de la firma de la paz. Él y Sylvia Gereda de Torrebiarte conducen un programa extremadamente crítico a los movimientos sociales. Gereda está casada con Diego Torrebiarte, quien mantiene vínculos con Cementos Progreso, empresa involucrada en un violento conflicto con las comunidades que se oponen a la construcción de una nueva planta de cemento en San Juan Sacatepéquez.

Las órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público en el 2016, sustentadas en el trabajo conjunto con la CICIG, ofrecen importantes pistas para entender los vínculos de la alianza.¹¹ Las capturas son el resultado del descubrimiento de una

... estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas y que resultaba en el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura. Entre los miembros de esta estructura se encuentran partidos políticos, empresas de televisión y radiodifusión propiedad de González y del ministro de Energía y Minas durante el Gobierno anterior, compañías constructoras, empresas privadas de seguridad, proveedores de fertilizantes y bancos privados (conferencia de prensa ciudad de Guatemala, julio 2016).

El sistema funcionaba por medio del financiamiento de campañas electorales por parte de las empresas privadas, que luego era lavado a través de complicados mecanismos, y luego de la llegada del partido al gobierno, las empresas recibían contratos millonarios del Estado. Las empresas, por su parte, pagaban comisiones económicas a los políticos de la estructura por los contratos asignados. La CICIG concluye que el caso representa “un sistema de corrupción que cooptó y reconfiguró el sistema de partidos políticos, el aparato institucional y hasta la agenda de intereses estratégicos del Estado de Guatemala” (conferencia de prensa ciudad de Guatemala, julio 2016).

Conclusiones

En este trabajo se da cuenta de varias dimensiones en las cuales se expresa el poder de las élites, lo cual contribuye a entender mejor los vínculos entre procesos globales y actores transnacionales, por un lado, (Peet *et al.*, 2011) y luchas ambientales locales, por otro.

A partir de esto, se puede afirmar que la penetración del capitalismo neoliberal en Guatemala ha significado una reconfiguración del Estado y de las relaciones entre élites domésticas y transnacionales, las cuales promueven el libre mercado. Así, este Estado emergente no pretende controlar el territorio nacional, sino más bien adoptar una lógica diferenciada para canalizar recursos productivos y coercitivos hacia determinadas áreas que pueden articularse en la acumulación capitalista (Hale, 2011). Dichas transformaciones provocan la resistencia de las poblaciones locales que se enfrentan a un nuevo ciclo de despojo y exclusión.

Pese a lo anterior, la resistencia también está articulada por las redes transnacionales de activistas que se oponen a los efectos del avance de las políticas neoliberales en el mundo. La reacción violenta ante la resistencia pacífica pone en evidencia dos asuntos; primero, que la élite tradicional percibe amenazas provenientes, y por el otro lado, de élites emergentes en el entramado, lo cual le permitió al Estado controlar a las élites tradicionales. El otro tipo de amenaza que percibe la élite proviene de los nuevos espacios políticos a lo que han accedido grupos subalternos, incluidos los indígenas y las mujeres.

Segundo, contrario a lo postulado por Block y Sommers (2014), ninguno de los grupos poderosos en Guatemala se ha aliado a los subalternos para protegerlos contra la destrucción de sus medios de vida concomitante con la expansión del modelo extractivista. Así, la amenaza que representan los nuevos espacios políticos ganados por actores subalternos es, por el contrario, enfrentada por medios violentos, subalternos e “inaceptables”. Esta respuesta permite también restablecer coaliciones con viejos aliados como la élite militar de la guerra, para la cual el avance de la justicia por los crímenes de guerra es una amenaza a su consolidación como nueva élite económica. Por su parte, las compañías transnacionales se vinculan a la estrategia a través de sus

relaciones con la élite local, al incluirlo como socios. Todos estos procesos tienen por objetivo reestructurar la política en Guatemala, aunque el resultado de esto todavía no está bien definido.

Las ideas (o narrativas) tienen el poder de delinear decisiones políticas y confieren legitimidad a políticas económicas y las prácticas del Estado. En este ensayo se demuestra que en la narrativa de la élite confluyen diversas ideologías, tanto neoliberales como anticomunistas. Esto es indicativo del poder de las estas últimas para movilizar temor y legitimar el uso de la violencia. La guerra y la falta de solución a sus orígenes siguen estando presentes en los conflictos. El libre mercado y la globalización han resultado en nuevas amenazas a la élite guatemalteca. Por un lado, la emergencia de nuevos actores económicos –lícitos e ilícitos– y su inserción en el andamiaje de corrupción del Estado significa una amenaza para el control estatal por parte de la vieja élite.

Los movimientos de resistencia están generando nuevas formas de organización o fortaleciendo las existentes, pero dentro de un espacio delimitado tanto por las prácticas legales e institucionales del Estado (Aguilar-Støen, 2015), como por el rango de prácticas que vinculan a las élites económicas domésticas, las empresas transnacionales, el Gobierno y los militares de la guerra. Los efectos de esta relación asimétrica, en la cual las élites controlan no solo más recursos sino que poseen un espacio de maniobra más amplio y que ellos mismos crean, son ambiguos y tienen un alto costo para las poblaciones rurales. En este artículo se hace referencia a la resistencia para iluminar las relaciones de poder al localizarlas precisamente en la esfera que contiene y constriñe las condiciones que permitan operar un cambio. En este ensayo se ha analizado los escenarios en donde se expresa la resistencia, para entender mejor distintas formas de poder ejercido por las élites (Abu-Lughold, 1990).

Precisamente este último punto requiere mayor debate e investigación, no solo desde la perspectiva de la relación entre empresas transnacionales y procesos locales, sino también desde un punto que permita entender cómo los recursos coercitivos con que cuentan las élites tienen vínculos con la seguridad global y más ampliamente con la geopolítica.

Notas

- 1 UDEFEGUA. “Soy defensora, soy defensor. Promuevo Derechos Humanos”. Informe sobre situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 2014.
- 2 Más información sobre la venta de la mina El Sastre en http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Venden_50_de_Mina_de_Oro_en_Guatemala
- 3 La información presentada arriba fue recopilada en el registro de compañías de Panamá.
- 4 Más información sobre Eduardo Aguirre <http://www.fmei.info/patrocinio/item/4-eduardo-aguirre-cantero/4-eduardo-aguirre-cantero.html>

- 5 Por ejemplo, 168 apelaciones fueron presentadas contra diversos aspectos del último intento fallido de reforma fiscal, la mayoría de estas se hicieron ante la Cámara de Comercio que pertenece al CACIF (ICEFI, 2015, 84-85).
- 6 Más información sobre la elección de Carlos Chacón Torrebiarte en la Corte Suprema de Justicia se encuentra aquí <http://noticias.com.gt/nacionales/20090625-eligen-presidente-csj-despues-41-intentos.html>
- 7 Más información sobre el puesto diplomático se encuentra aquí: <http://www.diplomatmagazine.nl/2013/12/01/guatemala-land-eternal-springland-investments/>
- 8 Más información sobre el cierre de la mina asociada al proyecto “Progreso VII Derivada, aquí <http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/mp-acciona-para-que-se-ejecute-cierre-de-mina>
- 9 El documento “Análisis de actores involucrados en acciones de oposición a la ejecución de proyectos energéticos y propuesta de estrategias para enfrentarles” fue preparado en el 2010 por Miguel L. Castillo Girón, catedrático de la UFM, para la Asociación Nacional de Generadores de Energía Eléctrica. Otro texto anónimo llamado “Organizaciones que promueven la conflictividad social en Guatemala. Redes de organizaciones locales e internacionales que promueven la conflictividad social, atentan contra el estado de derecho y desestiman la inversión privada en Guatemala” preparado para el presidente de la república y autoridades gubernamentales en materia de seguridad, justicia y desarrollo energético en 2012, presenta un análisis e información muy similar al documento del 2010 por Castillo Girón y, presumiblemente, él podría ser el autor de este segundo documento. Revisamos también los pasquines (6) que la FCT preparó durante la realización del juicio por genocidio en 2013 en los cuales deslegitimaba el juicio y a las víctimas de la guerra, el quinto panfleto fue dedicado al conflicto en la mina “El Escobal”. Escuchamos una conferencia dictada por Mary Anastasia O’Grady, miembro de la junta editorial de *The Wall Street Journal* en la UFM en 2006. En su conferencia O’Grady habla del ambientalismo como la ideología totalitaria que reemplaza al comunismo en el plano político, acusa a la Iglesia de influir negativamente en los conflictos y a los activistas ambientales de ser hipócritas que quieren enriquecerse con el conflicto. O’Grady tiene una larga historia como defensora de las elites Latinoamericanas.
- 10 Se tuvo acceso a la copia de un recibo emitido por un restaurante a la mina Marlin, por el pago que esta última le hizo al primero en concepto de comida servida a la policía en el 2014. Los entrevistados en Santa Rosa informaron que la mina paga la comida de los cincuenta efectivos de la policía nacional que están permanentemente dentro de las instalaciones de la mina.
- 11 Más información sobre el caso cooptación del estado, aquí <https://cmiguate.org/el-partido-patriota-es-una-macroestructura-criminal/>

Bibliografía

- Abu-Lughod, Lila. “The romance of resistance: tracing transformations of power through Bedouin women”. *American Ethnologist* 17, 1(2001): 41-55.
- Adams, Richard. “The development of the Guatemalan military”. *Studies in Comparative International Development* 4, 5(1969): 91-110.
- Adams, Richard. *Etnicidad en el ejército de la Guatemala liberal (1870-1915)*. Guatemala: FLACSO, 1995.

- Aguilar-Støen, Mariel. "‘Con nuestro propio esfuerzo’: Understanding the Relationships between International Migration and the Environment in Guatemala". *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* 93 (2012): 25-40.
- Aguilar-Støen, Mariel. "Staying the same: transnational élites, mining and environmental governance in Guatemala". En Benedicte Bull y Mariel Aguilar-Støen. *Environmental politics in Latin America: élite dynamics, the left tide and sustainable development*. London: Routledge Earthscan, 2015. 131-149.
- Aguilar-Støen, Mariel y Hirsch, Cecilie. "Environmental Impact Assessments, local power and self-determination. The case of mining and hydropower development in Guatemala". *The Extractive Industries and Society* 2 (2015): 472-479.
- Argueta, Otto. *Private Security in Guatemala: The Pathway to Its Proliferation*. Hamburg: Institute of Latin American Studies, GIGA Research Unit, 2010.
- Barton, Jonathan; Román, Álvaro y Fløysand, Arnt. *Resource extraction and local justice in Chile: Conflicts over commodification of spaces and the sustainable development of places. New political spaces in Latin American natural resource governance*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Block, Fredd y Somers, Margaret. *The power of market fundamentalism. Karl Polanyi's critique*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- Bräutigam, Deborah y Segarra, Monique. "Difficult partnerships: the World Bank, states, and NGOs". *Latin American Politics and Society* 49, 4 (2007): 149-81.
- Bryant, Raymond. L. Power, knowledge and political ecology in the third world: a review. *Progress in Physical Geography* 22, 1(1998): 79-94.
- Bryant, Raymond L. y Jarosz, Lucy. Ethics in Political Ecology: A special issue of Political Geography: Introduction: thinking about ethics in political ecology. *Political Geography* 23, 7(2004): 807-812.
- Bull, Benedicte. Elites, classness and environmental governance: conceptual and theoretical challenges. En B. Bull y M. Aguilar-Støen, *Environmental Politics in Latin America: Élite dynamics, the left tide and sustainable development*. New York: Routledge, 2015. 15-32.
- Bull, Benedicte; Castellacci, Fabio y Kasahara, Yuri. *Business Groups and Transnational Capitalism in Central America: Economic and Political Strategies*. London: Palgrave Macmillan Limited, 2014.
- Bull, Benedicte. *Aid, Power and Privatization: The Politics of Telecommunication Reform in Central America*. EE. UU.: Edward Elgar Publishing, 2005.
- Carruthers, D. V. *Environmental Justice in Latin America. Problems, promise and practice*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2008.
- Casaús Arzú, Marta Elena. *Guatemala: linaje y racismo*. Costa Rica: FLACSO Costa Rica, 1992.
- Castillo-Girón, Miguel Lisandro. *Análisis de actores involucrados en acciones de oposición a la ejecución de proyectos energéticos y propuesta de estrategia para enfrentarles*. Guatemala city: Asociación Nacional de Generadores (ANG), 2010.
- Castree, Noel. "Differential geographies: place, indigenous rights and 'local' resources". *Political Geography* 23, 2 (2004): 133-167.
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH. *Guatemala: Memoria del Silencio. Comisión para el esclarecimiento histórico*. Guatemala: CEH, 1999.
- Centro Civitas. "Panorama de la concentración de la propiedad de los medios en Guatemala". *Observatorio Latinoamericano de regulación, medios y convergencia*, 2014.

- Cuffe, Sara. "A Backwards, Upside-Down Kind of Development. Global Actors, Mining and Community-Based Resistance in Honduras and Guatemala". Washington, DC: Rights Action, 2005.
- Dardón, Jorge y Calderón, Christian. Case study on the network of López Villatoro, the "tennis shoe king", In Ivan Briscoe, Catalina Perdomo, Catalina Uribe Burcher, *Illicit Networks and Politics in Latin America*, The Hague: IDEA, The Netherlands Institute for Multiparty Democracy and Clingendael, 2014.
- Dary, Claudia. *Unidos por nuestro territorio. Identidad y organización social en Santa María Xalapán*. Ciudad de Guatemala, Guatemala: Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2010.
- De Certau, Michael. *The practice of everyday life*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Dougherty, Michael. L. "The Global Gold Mining Industry, Junior Firms, and Civil Society Resistance in Guatemala". *Bulletin of Latin American Research* 30, 4 (2011): 403-418.
- Edelman, Marc y León, Andrés. "Cycles of Land Grabbing in Central America: an argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras". *Third World Quarterly* 34 (2013): 1697-1722.
- Emery, Alex. "Tahoe Resources seeking second mine in Guatemala, CEO says", 2013. *Business insight in Latin America*. <<http://www.bnamericas.com/news/mining/tahoe-resources-seeking-second-mine-in-guatemala-ceo-says>>.
- Escobar, Arturo. *Territories of difference: place, movements, life, redes*. Duke: University Press, 2008.
- Fairhead, James y Leach, Melissa. "False fores thistory, complicit social analysis: rethinking some west African environmental narratives". *World Development* 23 (1995): 1023-1035.
- Fulmer, Amanda M.; Godoy, Angelina y Neff, Philip. "Indigenous rights, resistance, and the law: Lessons from a Guatemalan mine". *Latin American Politics and Society* 50, 4 (2008): 91-121.
- Gramsci, A. *Selections from the Prison Notebooks*, London: Lawrence and Wishart, 1971.
- Gobierno de Guatemala. *Minería en Guatemala*, 2014. <<http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Extractives/pdac2014/7.%20Ivanova%20Ancheta%20Mineria%20Guatemala%202017.%204.pdf>>.
- González-Ponciano, José Ramón. The *shumo* challenge. White class privilege and the post-race, post-genocide alliances of cosmopolitanism from below. En C. McAllister y Nelson, D.M. *War by other means. Aftermath in post-genocide Guatemala*. Durham, North Carolina: Duke University Press, 2013. 307-329
- Harvey, David. *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press: New York, 2005.
- Hernández, Oswaldo. J. (2014). *La oposición a la minería, la nueva amenaza a la seguridad nacional*. Plaza Pública. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2014.
- Holden, William. N. y Jacobson, Daniel. "Ecclesial opposition to nonferrous mining in Guatemala: neoliberalism meets the church of the poor in a shattered society". *Canadian Geographer / Le Géographe canadien* 53, 2 (2009): 145-164.
- Hurtado, Margarita. y Lungo, Irene. (2007). *Aproximaciones al movimiento ambiental en Centroamérica*. Guatemala: FLACSO, 2007.
- Ibarra, Carlos. F. (2006). "The culture of terror and Cold War in Guatemala 1". *Journal of Genocide Research* 8, 2 (2006): 191-208.
- Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. *La minería en Guatemala: realidad y desafíos frente a la democracia y el desarrollo*. Guatemala: Instituto Centroamericano

- de Estudios Fiscales, 2014. <<http://icefi.org/wp-content/uploads/2014/03/mineria-impresion.pdf>>.
- Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. *Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas*. Guatemala: ICEFI, American University and F&G editores, 2015.
- Kasahara, Yuri. "Should I stay or should I go? A comparative study of banking sector policies and the strategies of Central American business groups". *Business and Politics* 14, 4 (2012): 1-43.
- Kothari, Uma. "Authority and expertise: The professionalisation of international development and the ordering of dissent". *Antipode* 3, 3(2005): 425-446.
- Letona Zuleta, José. V.; Camacho Nassar, Carlos y Fernández Gamarro, Juan. Antonio. *Las tierras comunales Xincas de Guatemala. Tierra, identidad y conflicto en Guatemala*. Guatemala: FLACSO, 2003.
- McAllister, Carlota y Nelson, Diane. *War by other means. Aftermath in post-genocide Guatemala*. Durham, North Carolina: Duke University Press. 2013.
- McCleary, Rachel. M. *Dictating Democracy: Guatemala and the End of the Violent Revolution*. Gainesville, FL: University Press of Florida, 1999.
- Ministerio de Energía y Minas. *Estadísticas Mineras*, 2015. <<http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-mineria-e-hidrocarburos-2/estadisticas-mineras/>>.
- Munoz-Elias, Juan. Pablo. "Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ¿suspensiones o cancelaciones de licencias de explotación minera en los casos de San Pedro Ayampuc/ San Jose del Golfo, San Rafael las Flores y Senahú/Panzós". *Revista Enfoque* 8 (2016): 41.
- Nolin, Catherine y Stephens, Jaqui. "We Have to Protect the Investors": Development & Canadian Mining Companies in Guatemala. *Journal of Rural and Community Development* 5, 3 (2010): 37-70.
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHA. *Guatemala: Nunca más. Informe del Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)*. Volumen III El entorno histórico. O. d. D. H. d. A. d. Guatemala. Guatemala, 1998.
- Oglesby, Elisabeth. y Ross, Amy. "Guatemala's Genocide Determination and the Spatial Politics of Justice". *Space and Polity* 13, 1 (2009): 21-39.
- Organización de Naciones Unidas. *Los desalojos en el valle del Polochic. Una mirada a la problemática agraria y a la defensa de los derechos humanos de las comunidades q'eqchi's*. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Guatemala, 2013.
- Palencia-Prado, Mayra. *Élites y lógicas de acumulación en la modernización económica guatemalteca*. Washington: A. U. W. D. C. F. A. Studies, 2012.
- Pearce, Jenny. (1998), "From Civil War to 'Civil Society': Has the End of the Cold War Brought Peace to Central America?". *International Affairs* 74, 3 (1998): 587-615.
- Pedersen, Alexandra. "Landscapes of resistance: Community opposition to Canadian mining operations in Guatemala". *Journal of Latin American Geography* 13 (2014): 184-214.
- Peet, Richard; Robbins, Paul y Watts, Michael J. *Global Political Ecology*. Routledge: London, 2011.
- Pellecer, Martín. *Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra*, 2013. <<https://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-élite-la-alianza-que-gano-la-guerra>>.
- Polanyi, Karl. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon, 1944.
- Rasch, Elisabet. "Transformations in Citizenship: Local Resistance against Mining Projects in Huehuetenango (Guatemala)". *Journal of Developing Societies* 28, 2 (2012): 159-184.

- Robbins, Paul. *Political ecology: A critical introduction*. UK: John Wiley & Sons, 2011.
- Scott, James. *Domination and the arts of resistance*. NewHaven, CT: Yale University Press, 1990.
- Schirmer, Jeniffer. G. *The Guatemalan military project: A violence called democracy*. Estados Unidos: University of Pennsylvania Press.
- Schneider, Aaron. *State-building and tax regimes in Central America*. Cambridge: University Press, 2012.
- Sieder, Rachel. "'Emancipation' or 'regulation'? Law, globalization and indigenous peoples' rights in post-war Guatemala". *Economy and Society* 40, 2 (2011): 239-265.
- Solano, Luis. *Guatemala petróleo y minería en las entrañas del poder*. Ciudad de Guatemala: Infopress, 2005.
- Solano, Luis. *Cómo se constituyó un proyecto cuasi-militar en la mina El Escobal*. Centro de Medios Independientes, Guatemala, 2015. <<https://cmiguate.org/como-se-constituyo-un-proyecto-cuasi-militar-en-la-mina-el-escobal-2/>>.
- Solano, Luis. "El gobierno del PP: élites militares y económicas se reparten el control del Estado". *El Observador* 7, (2012): 34-35
- Stølen, Kristi-Anne. *Guatemalans in the aftermath of violence*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007.
- Urkidi, Leire. "The Defence of Community in the Anti-Mining Movement of Guatemala". *Journal of Agrarian Change* 11, 4 (2011): 556-580.
- Valdez, Fernando. *El Gobierno de la élites Globales. Como se organiza el consentimiento – La experiencia del triángulo norte*. Guatemala: Igep, Universidad Landívar, Editorial Cara Parens, 2015.
- Valdez, Fernando y Palencia Prado, Mayra. *Los Dominios de Poder: La Encrucijada Tributaria*. Guatemala: Flasco, 1998.
- Watts, Michael y Richard. Peet. "Liberating political ecology". En Paul Robbins, *Liberation ecologies: Environment, development, social movements*. New York; Routledge, 2004.
- Yagenova, Simona. V. *La industria extractiva en Guatemala: políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2011*. Guatemala: FLACSO, 2012.
- Yagenova, Simona. V. y Rocío. García. "Indigenous People's Struggles Against Transnational Mining Companies in Guatemala: The Sipakapa People vs GoldCorp Mining Company". *Socialism and Democracy* 23, 3 (2009): 157-166.

Mariel Aguilar-Støen. Noruega, profesora asociada en el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Ambiente (SUM) de la Universidad de Oslo, Noruega. Sus intereses de investigación incluyen con lictos socioambientales, ecología política y procesos de mercantilización de la naturaleza, incluyendo pagos por servicios ambientales y el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), así como asuntos agrarios y migración. Su principal área geográfica de trabajo es Centroamérica. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro *Environmental politics in Latin America: elite dynamics, the left tide and sus-tainable development*. London, Routledge Earthscan (2015), coeditado con Benedicte Bull. Contacto: mariel.stoen@sum.uio.no

Benedicte Bull. Noruega, profesora el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Ambiente (SUM) de la Universidad de Oslo, Noruega, directora de la Red Noruega de Investigaciones sobre América Latina (NorLARNet) y de la Academia de Gobernanza Global de Oslo. Sus principales intereses de investigación son la política latinoamericana, la economía política y el desarrollo con énfasis particular en Centroamérica, élites y desigualdad. Su libro más reciente se titula *Pensamiento social noruego sobre América Latina*. Buenos Aires, CLACSO (2015).

Contacto: benedicte.bull@sum.uio.no